



FICHA POR PAÍS

PRINCIPALES CRISIS DE CHILE (1990-2020)

INTRODUCCIÓN

Concepto de crisis funcional al Observatorio¹

El debate sobre el concepto de crisis posee una literatura muy amplia. De modo general, las crisis remontan a la idea de un momento decisivo de desestabilización del orden normal que genera transiciones y transformaciones, ocasionando rupturas con el orden anterior, lo que posibilita la construcción de nuevos órdenes, aunque no existan las garantías que serán mejores o peores que el momento anterior.

Dado que la mayor parte de la literatura académica sobre las crisis abordan las crisis económicas por las cuales pasan los países de la región, se torna necesario ampliar las dimensiones y variables de análisis, resaltando los aspectos políticos, sociales, medioambientales y sanitarios, así como las especificidades temporales y locales de cada evento. Así, se considera que las crisis deben ser analizadas de acuerdo con los casos en concreto, resaltando las especificidades de cada acontecimiento.

Las crisis en la región implican un malestar o quiebre con el statu quo imperante. En este caso se puede observar una tendencia a un malestar provocado por el modelo macroeconómico/político/social del neoliberalismo. Se pueden observar dos tipos de crisis: una que está ligada a efectos dados por las crisis económicas internacionales, las cuales tienen sus consecuencias en Latinoamérica y que pueden ser observadas desde una temporalidad común; y las crisis de carácter interno de cada país, que están mayormente relacionadas a temas de corrupción, pobreza, violencia y otras especificidades que generalmente no comparten temporalidad con otros países.

En este sentido, consideramos las crisis económicas como problemas económicos relevantes que ocurren debido a las crisis cíclicas del capitalismo global que ocasionan grandes impactos en las economías dependientes de la región, generando recesión económica, disminución de los empleos, aumentos de la pobreza, desigualdad y conflictividad social.

Además, consideramos las crisis políticas como problemas políticos que ocurren debido a los límites del modelo de democracia liberal de carácter representativo, la cual no logra la representación de la totalidad de la sociedad en los espacios de conformación

¹ Estas definiciones fueron elaboradas por el Observatorio de Crisis FAHU, con base en el documento principal titulado "Documento de Trabajo: Definiendo el concepto de crisis".



del Estado, generando insatisfacciones, desconfianza y cuestionamientos a los representantes políticos. Están vinculadas con la inestabilidad institucional de los Estados que propicia especialmente las crisis de la representación política; crisis de los partidos políticos y crisis de confianza en la política. La corrupción ha estado asociada, en la región, a las crisis políticas recurrentes, dado que la mayoría de las crisis políticas están vinculadas a la corrupción.

Por consiguiente, comprendemos por crisis sociales los problemas relacionados a la debilidad de los indicadores sociales, como aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad generados por los problemas económicos, en muchos casos, coyunturales. Entretanto, también deben ser comprendidos a la luz de la conflictividad social más amplia, de carácter histórico y estructural, evidenciado por las polarizaciones y grandes asimetrías constantes entre las clases sociales de la región.

Por fin, consideramos que las crisis medioambientales ocurren cuando el entorno natural experimenta un cambio brusco que pone en riesgo las especies dentro de dicho ecosistema. Mientras que consideramos las crisis sanitarias como emergencias sanitarias determinadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarla.



LÍNEA DE TIEMPO DE CRISIS EN CHILE



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU

CRISIS POLÍTICA

Chile ha sido estudiado en el contexto latinoamericano como un caso de estabilidad política, social y económica. La transición y consolidación democráticas se dieron a partir de un proceso pactado en el periodo 1984–1988, que delimitó la democratización iniciada en 1990. Durante el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, se lidió constantemente con la presión de mantener la democracia protegida de Augusto Pinochet (entonces Comandante en Jefe del Ejército) en medio de un proceso de derechos humanos que, en 1991, derivó en el Informe Rettig. Esto supuso un conjunto de complejas presiones políticas en medio de senadores designados, y una controversia de límites que derivó en una pérdida prácticamente total de Laguna del Desierto en 1994 ante el Tribunal Arbitral Internacional ad hoc acordado con Argentina (que se vería confirmada en 1995 con el fallo del recurso de revisión y, en subsidio, de interpretación interpuesto por Chile), el cual fue consecuencia de una serie de descoordinaciones, tanto de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado como en



otras unidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que fue conducido en el periodo por Enrique Silva Cimma (Valenzuela Lafourcade, 1999).

Las **crisis políticas internas**, sin embargo, se han dado sistemáticamente desde inicios de la década del '2000. De este modo, la crisis de corrupción (MOP-GATE) entre **2003 y 2006** forzó un proceso de reformas que derivaron, tanto en la nueva Constitución de 2005, cuando la firma de Augusto Pinochet fue reemplazada por las de Ricardo Lagos Escobar (2000–2006) y de Francisco Vidal, con el consenso de la Alianza por Chile. A esto se suma que Chile tenía controversias internacionales con todos sus vecinos (Rodríguez Elizondo, 2006).

Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006–2010), las crisis políticas que signaron el periodo fueron: la implementación del Transantiago, que implicó una reformulación del sistema de transportes de la región Metropolitana con un plan prácticamente terminado durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000–2006), a lo cual se suma equilibrios legislativos débiles en medio de un fortalecimiento del Senado (Hunneus, 2008; Funk, 2009). A esto se suma, en el frente internacional, las tensiones finales con Perú, que derivaron en la interposición del recurso, por parte de este último, con el cual se inició el litigio por los límites marítimos en la Corte Internacional de Justicia en enero de 2008.

Igualmente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010–2014) se enfrenta el desarrollo posterior de la **crisis del 27-F**, tanto en la fase de reconstrucción de las regiones desde El Maule a Biobío, lo que implicó un proceso de combinación de una sostenida ayuda internacional con una expansión del gasto fiscal para acelerar este proceso. No obstante, en el proceso de las reformas políticas los resultados fueron magros, dada la baja cantidad de iniciativas de ley que fueron finalmente aprobadas para convertirse en leyes (3 de 10 en reformas políticas, y 2 de 11 en materia de modernización del Estado) (Avendaño, 2013).

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014–2018), se prosiguió con una **agenda constituyente** mediante la implementación de un sistema de diálogos ciudadanos conducentes a la creación de una nueva constitución, lo que fue erigido en uno de los procesos más importantes de su gobierno (BBC, 11 de marzo de 2018), aun cuando el proyecto final se ingresó cinco días antes del término de su mandato, y quedó suspendido con la asunción de un nuevo gobierno liderado por Sebastián Piñera.

No obstante, los escándalos de corrupción y de financiamiento de la política remecieron al país, como los casos Penta, Corpesca y del SII, entidad que se abstuvo de interponer querellas para profundizar las investigaciones una vez el director de la institución de



2015, dejó el cargo. A esta sucesión de conflictos, que ya afectaban al sistema político en su conjunto, se sumó el caso Caval.

El segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018–al presente) no ha estado exento de crisis políticas, llegando al más nivel más bajo de confianza ciudadana que han tenido los gobiernos desde la transición a la democracia. Junto con retirar el proyecto de reforma constitucional de Michelle Bachelet, comenzó una progresión de escándalos políticos. A esto también se suma una discusión tributaria condicionada por la idea de implementar un impuesto para súper ricos en medio del historial de elusiones y evasiones tributarias de Sebastián Piñera.

Todo lo anterior llevó a la **más importante movilización social de las últimas décadas**, que ha sido denominado “Estallido Social” en octubre de 2019. La ciudadanía se movilizó por una demanda de mayor justicia social y una nueva Constitución Política. Esta movilización fue masiva y con hechos de violencia, sostenida por más de un mes. Es así, que ante el riesgo a la estabilidad democrática que esto conllevaba, 11 partidos políticos con representación en el Congreso firmaron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que dio inicio al proceso constituyente en curso. (CNN Chile, 21 de diciembre de 2020)

De esta manera, según los diferentes años de protestas sociales, los cuales tienen como hito los años 2006, 2011 y 2019, se puso en cierta manera, un foco de tensión entre las demandas y la respuesta del gobierno de turno, siendo el periodo más crítico el año 2019, donde la encuesta Cadem, para la fecha del 11 de noviembre de ese año, destaca que el 79% de la población (encuestada) desaprobó las gestiones del presidente. Por su parte, como secuela de esta crisis político-social y junto con la pandemia, para 2020, se destaca, según encuesta Critería (2020), el presidente Piñera obtiene su nivel más bajo de aprobación, sólo con un 7%.

Desde la perspectiva de los componentes de la democracia, tres indicadores exhiben un desempeño superior a 0,75 desde 1990: 1) el componente electoral, el cual mide el atributo relacionado a la participación formal, así como al desarrollo de elecciones transparentes y limpias como forma de sostener la relación entre las élites políticas y la sociedad; 2) el componente liberal, el que mide la preservación de la libertad, en tanto propiedad de los individuos, a partir de la calidad de las constricciones a las que el Estado se limita para garantizar la autonomía de los individuos, y; 3) el componente deliberativo, medido en términos del uso de la razón pública centrada en el bien común como factor movilizador de la decisión política. Estos tres indicadores han evolucionado al punto de mantenerse en los tres casos a niveles solo comparables en la región con los de Uruguay.

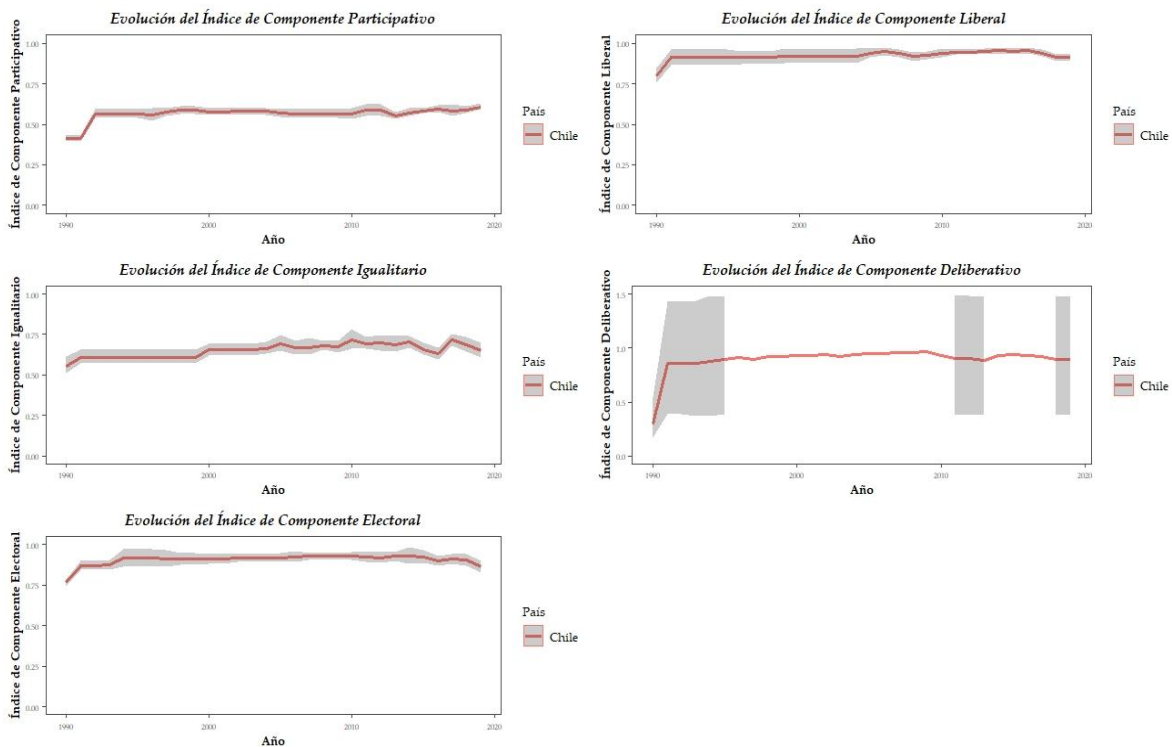


Los niveles del componente participativo se han mantenido ligeramente por sobre 0,62 desde 1993 en adelante, mientras que desde 1990 se mostró con valores cercanos a 0,45. En este sentido, los mecanismos informales de la participación los que se han mostrado más bien débiles, pero dentro de niveles comunes para los países de América del Sur. Es más, la calidad de este indicador se ve jalonada por el componente electoral. Esto confirmaría el enunciado de que la democracia chilena descansa muy significativamente en lo electoral.

El componente igualitario se ha mantenido en niveles cercanos a 0,6 en toda la década del 90 del siglo XX, exhibiendo solo aumentos marginales hasta alcanzar valores cercanos a 0,7 desde 2006 en adelante. En este sentido, el componente de la democracia que posiciona en mayor cuantía la igualdad en el acceso a recursos, al poder, a los derechos y a las libertades ha tendido a ser más valorado en el largo plazo, aunque con magros cambios de corto plazo. De este modo, el componente igualitario, que es el que peor desempeño muestra de todos los componentes de la democracia, posee niveles superiores a la media de América del Sur, pero tampoco están en niveles muy buenos, como podría ser desde 0,75 en adelante.



Gráfico 1. Evolución los indicadores de componentes de la democracia en Chile (1990–2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de los indicadores de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2020).

En el ámbito de la corrupción, sin embargo, los procesos revisados no tuvieron un impacto significativo en el comportamiento de los mismos. A modo de ejemplo, el caso MOP-GATE, que generó una presión significativa sobre la clase política para generar reformas de modernización del Estado, no alteraron mayormente el rendimiento de todos los indicadores escogidos. Es más, solo hay dos hitos que alteran seriamente el comportamiento de estos, a saber: 1) desde el término de la transición a la democracia a las reformas para las elecciones municipales y parlamentarias de 1992, y; 2) desde el año 2007 en adelante, con la crisis derivada de la implementación del Transantiago. En el caso del primer hito, todos los indicadores mejoran consistentemente, mientras que el segundo generó el espacio para la baja del desempeño de algunos índices, los que comentaremos a continuación.

El Índice de Actividades Corruptas del Legislativo comienza a mostrar leves mejorías para el periodo 2013–2014, pocos meses antes del “Escándalo de las platas políticas”,



dado que se muestran mejoras sostenidas de este indicador, especialmente desde el inicio de la discusión de las reformas al sistema de financiamiento de la política, así como aquella atinente a la renovación del registro de militantes de partidos políticos, niveles que mejoran aún más cuando se completa la reforma en 2017.

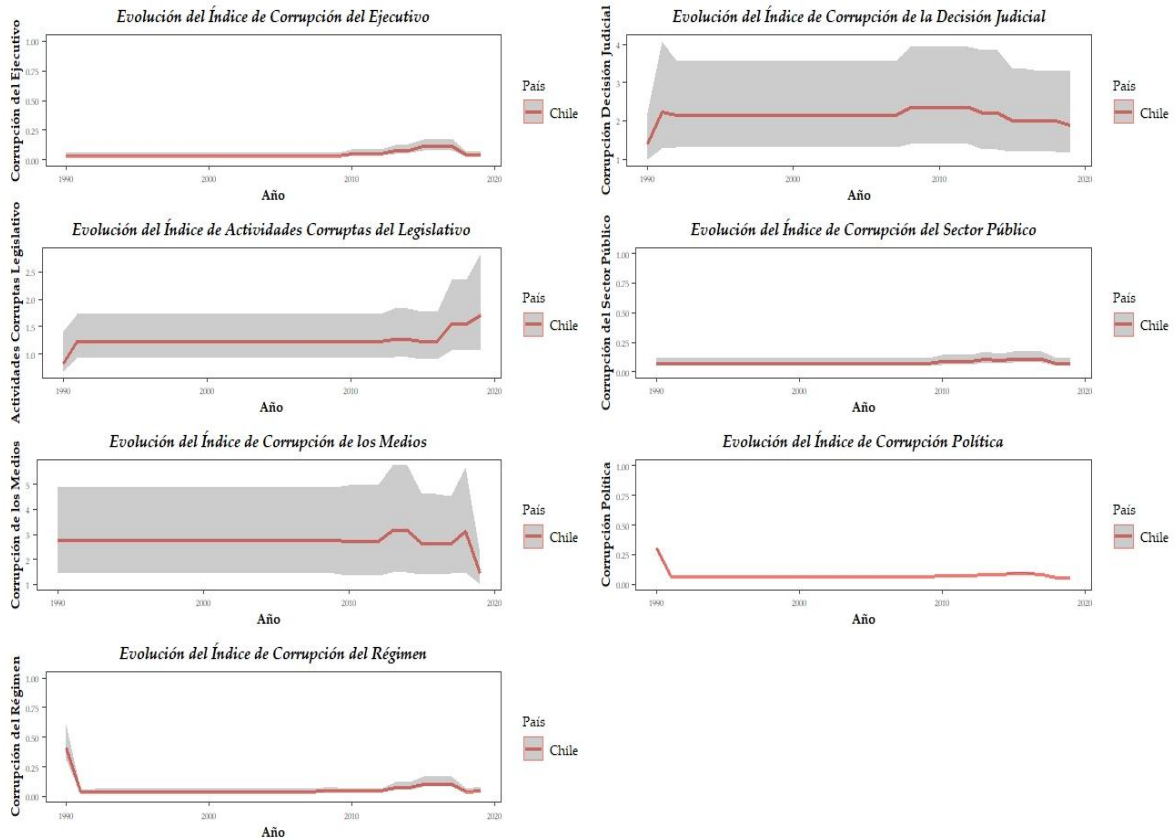
Sin embargo, el Índice de Corrupción del Ejecutivo, así como el Índice de Corrupción del Régimen indican una leve baja en el desempeño de Chile en materia de corrupción, aproximadamente desde el año 2008, lo que permite observar un desplazamiento de la corrupción a los funcionarios más alto del poder ejecutivo, en el primer caso, mientras el segundo confirmaría que las conductas corruptas que más desarrollo han tenido están asociadas al desfalco, la coima y la malversación de fondos públicos. Igualmente exhibe el Índice de Corrupción del Sector Público. Luego, el Índice de Corrupción Política confirma que, aunque ha aumentado la corrupción como un problema que permea todo el sistema político, lo ha hecho de manera marginal.

Luego, el Índice de Corrupción de la Decisión Judicial indica, contrariamente a otros indicadores, que el desempeño de la judicatura en tanto productora de decisiones imparciales sobre las controversias entre particulares ha mejorado desde el punto de vista de la mayor complejidad que implica la compra de fallos o decisiones judiciales, ya sean estos favorables, o bien, la compra de favores asociados a acelerar juicios. Este indicador decae nuevamente en 2015, a partir del “Escándalo de las platas políticas”, así como del caso Caval, niveles que inician una nueva baja desde 2018, la cual persiste hasta la fecha.

No obstante, un indicador que ha empeorado consistentemente sus niveles desde 2017 es el Índice de Corrupción de los Medios, cuyo comportamiento devela que se ha vuelto más sencillo el acceso a la ejecución de pagos, tanto a periodistas, como publicistas y operadores de radiodifusión televisiva. Casos de referencia de esta tendencia apunta a las divisiones existentes en torno a la cobertura de los casos Caval, “Platas políticas”, Corpesca, entre otros. Esta tendencia ha ido en aumento, especialmente en el caso del “Estallido social” de 2019.



Gráfico 2. Evolución de indicadores de corrupción en Chile (1990–2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de los indicadores de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2020).

CRISIS ECONÓMICA

Desde el punto de vista de las crisis económicas en Chile, estas responden a efectos de una economía abierta expuesta a los remecios internacionales, por lo cual, se puede observar que Chile presenta sus peores ciclos económicos, durante 1982 con la crisis bancaria; efecto provocado por reformas económicas impulsadas por la dictadura chilena, donde el país comenzó a depender excesivamente del mercado exterior. A su vez este proceso de crisis se ve reflejado nuevamente en la **década de los 90, con la crisis asiática evidenciando** así, la dependencia del país, en la exportación de productos al mercado exterior.

Ahora bien, las posteriores crisis en Chile siguieron siendo efectos internacionales, a lo cual el país generó medidas económicas para hacer frente a estos embates, por lo cual,

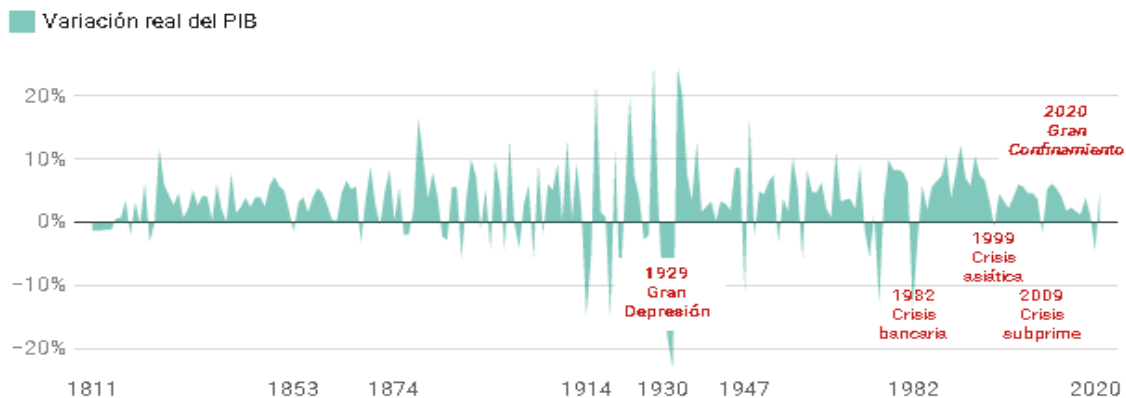


crisis como la subprime, que tuvo sus efectos en **2008-2009**, no tuvo efectos tan negativos que generan un desplome de la economía chilena, dada la sostenida activación de la demanda agregada durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, estrategia que evitó el desarrollo de una recesión prolongada, aunque sí hubo un crecimiento negativo.

Por su parte en **2020 se presenta como una de las peores crisis económicas** en la historia de Chile, pero aún así se debe destacar que Chile junto con Uruguay, son los dos países con mejor desarrollo económico, por lo cual en este sentido la crisis afecta a la capacidad adquisitiva y del PIB por habitante, lo cual se compara con el año anterior viendo así los efectos de la crisis.

Gráfico 3. Crecimiento económico histórico de Chile

Serie histórica basada en Díaz, Lüders y Wagner (período 1811-2010) y en el FMI (2011 en adelante). Las cifras de 2020 y 2021 corresponden a proyecciones del FMI.



Fuente: Díaz, J.; Lüders, R. y Wagner, G. (2016)

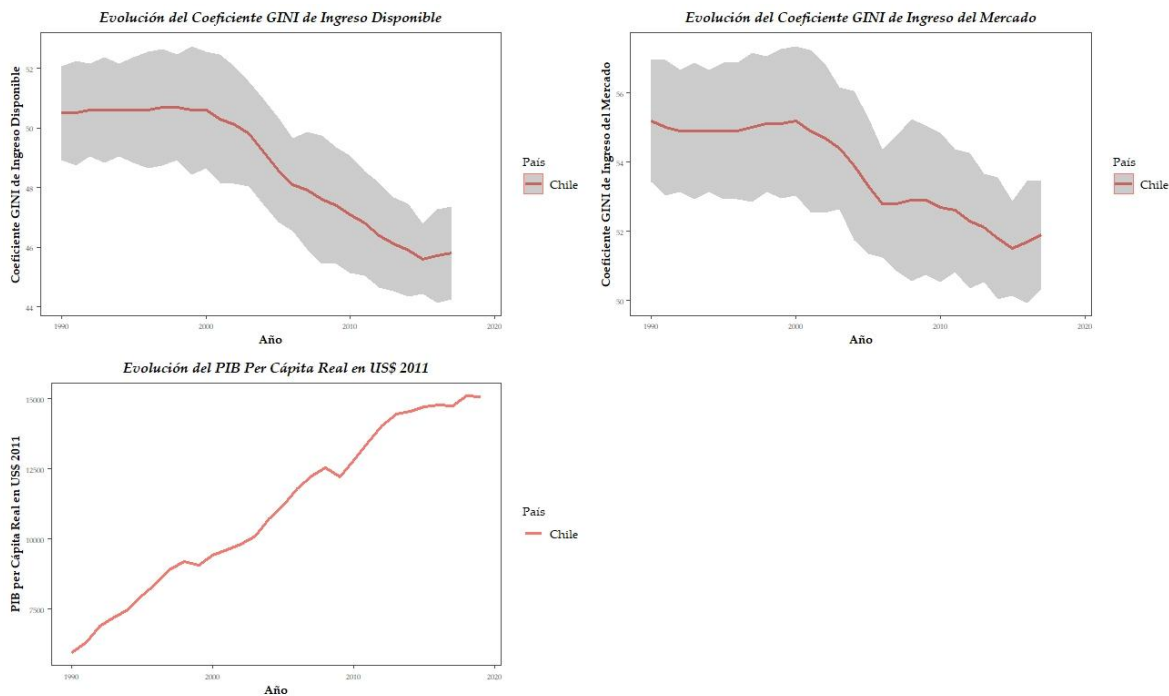
Respecto del rendimiento de los componentes de riqueza y redistribución desde 1990 a 2019, las condiciones de redistribución que genera el mercado no divergen mayormente del resto de los países de América del Sur. De este modo, partiendo desde 1990 con 55,2 unidades del coeficiente GINI de desigualdad, este se ha reducido consistentemente hasta valores de 51,9 en 2017, dado que no hay datos disponibles de SWIID para Chile posteriores a este último año (Solt, 2020).

Respecto de la redistribución de ingreso disponible, este fluctúa de manera consistente entre 50,7 unidades en 1997, y 45,7 en 2016. De este modo, se observa un cambio total de cinco puntos entre el máximo y el mínimo absolutos en todo el periodo referido. A partir de eso último, se puede afirmar que el efecto redistributivo del Estado, sin ser sustancial, sí consigue algún éxito en dicha redistribución, la que fluctúa entre 3,4 y 6,1 puntos, aunque las mejoras más significativas se generan desde 2008 en adelante. Esta



tendencia se desarrolla en conjunto con un aumento exponencial del PIB per cápita real desde US\$5.933 en 1990 a US\$15.091 en 2019, lo que implica que no se acoplan ambas tendencias.

Gráfico 4. Evolución de componentes de desarrollo económico en Chile (1990-2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de los indicadores de SWIID (Solt, 2020) y Banco Mundial (2020).

CRISIS SOCIAL

Las crisis sociales, si bien iniciaron como manifestaciones contra reformas o políticas de carácter económicas, estas trascendieron a un nivel social más generalizado desembocando en una crisis política poniendo en manifiesto una deslegitimación del gobierno. De esta manera, según los **diferentes años de protestas sociales**, los cuales tienen como hito los **años 2006, 2011 y 2019**, se puso en cierta manera, un foco de tensión entre las demandas y la respuesta del gobierno de turno, siendo el periodo más crítico el año 2019, donde la Cadem, para la fecha del 11 de noviembre de ese año, destaca que el 79% de la población (encuestada) desaprobó las gestiones del presidente. Por su parte, como secuela de esta crisis político-social y junto con la pandemia, para 2020, se destaca, según encuesta Critería (2020), el presidente Piñera obtiene su nivel más bajo de aprobación, sólo con un 7%.



Las crisis sociales, en Chile se destacan tres hitos principales, los cuales son provocados por manifestaciones estudiantiles que posteriormente se transforman en movilizaciones generales, las cuales se manifiestan principalmente contra políticas o reformas neoliberales. Esto fue especialmente patente en las movilizaciones educacionales de 2006 (“Marcha de los pingüinos”), 2011 (“Marcha de los universitarios”) y 2019 (“Estallido social”).

Los hitos antes referidos, especialmente el de **2019, resultó el más crítico para el sistema político**, dado que el nivel de movilizaciones llevó a que el gobierno decretara Estado de Emergencia y utilizara los militares para intentar contener la situación a nivel país, lo cual no se hacía desde el 27-F, en el que hubo una tardanza de 72 horas en la implementación del Estado de Catástrofe para la región del Biobío. A esto se suma la emergencia ocasionada por la erupción del volcán Chaitén en 2008, lo que requirió la designación de delegados especiales para sobrellevar la reconstrucción de la ciudad homónima, como José Goñi y Paula Narváez.

A partir de los indicadores sociales exhibidos en el gráfico 5, se puede observar que hay dos hitos relevantes en la mejora de las condiciones de funcionamiento del sistema social: la asunción de Ricardo Lagos Escobar y la de Michelle Bachelet.

Respecto del primer gobierno, cabe señalar que los niveles, tanto del Índice de Acceso Igualitario al Poder como del Índice de Facultamiento Político de las Mujeres mejoran consistentemente. En el primer caso, desde niveles cercanos a 0,5 en 1990, este aumenta a 0,75, mientras que en segundo, el acceso a cargos legislativos para las mujeres, así como el acceso formal al poder para las féminas aumenta desde 0,6 en 1990 a niveles cercanos a 0,8. Ambas tendencias se han mantenido estables desde entonces.

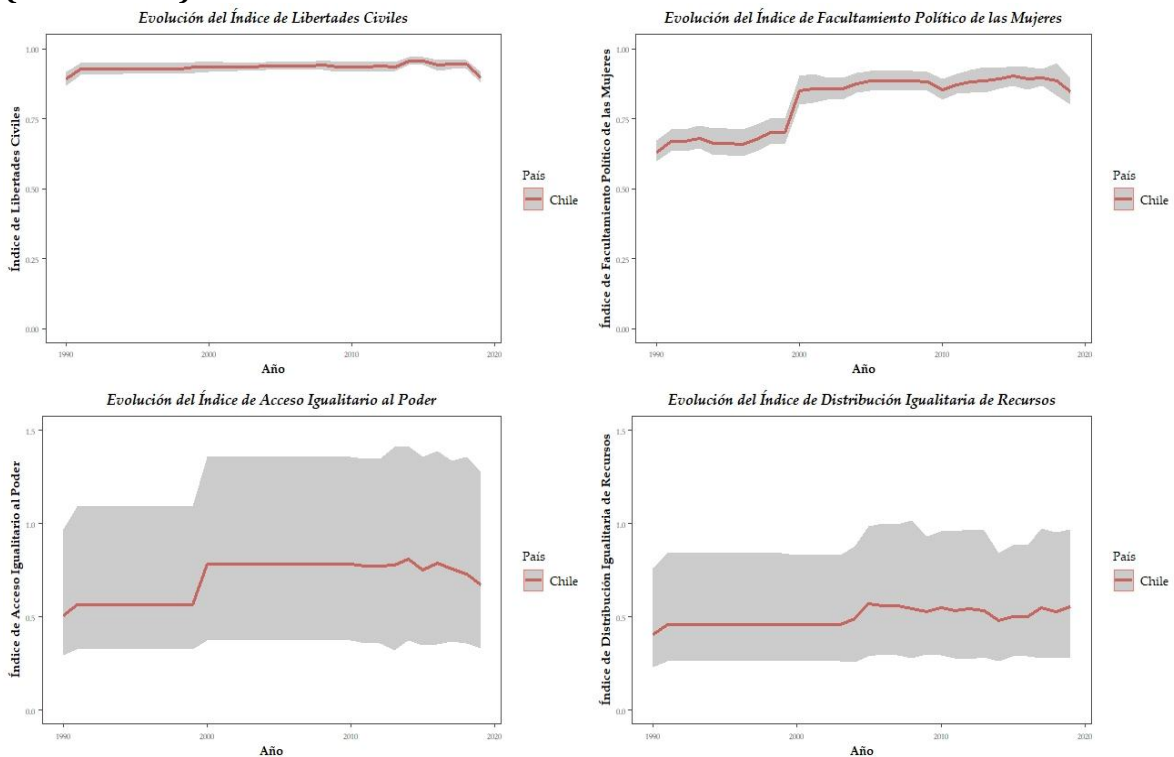
Por otra parte, el Índice de Distribución Igualitaria de Recursos exhibe aumentos desde niveles inferiores a 0,5 en 1990, a valores próximos a 0,6 desde 2006 en adelante, tendencia que se mantiene hasta la actualidad. Este aumento coincide con la reforma al programa Puente de 2004 con la creación del programa Chile Crece Contigo (2006), así como con la consolidación del sistema de protección social en 2008 con la implementación del Pilar Básico Solidario. Esto último ha dado lugar a una mejoría al acceso a recursos, tanto tangibles como intangibles para la sociedad. No obstante, las reformas posteriores no han exhibido, conforme al indicador ya señalado, una mejoría importante en los niveles de distribución de recursos en general.

Respecto del Índice de Libertades Civiles, este se ha mantenido en valores próximos a 0,9 desde 1992 en adelante, lo que implica que existe un nivel alto, pero estancado, de



ausencia, tanto de violencia como de constricciones estatales a las libertades individuales y civiles. La baja que se observa durante 2019 es potencialmente atribuible al Estallido Social y el desempeño, tanto de las policías como de las fuerzas armadas durante su desarrollo.

Gráfico 5. Evolución del índice ordinal de Democracia Deliberativa en Chile (1990-2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de los indicadores de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2020).

CRISIS SANITARIA

En cuanto a la crisis sanitaria, Chile está dentro de los países con mayor cantidad de casos, y destacando, además, según lo que se puede observar, que el país que más rápido elevó sus tasas de contagio entre abril y junio en comparación con el resto de los países, incluso más rápido que Argentina y Brasil.

Esto llevó a que se requiriera una investigación penal (en curso a la fecha de cierre del presente informe) para establecer el sistema de conteo de muertos, dentro de los cuales se requirió el testimonio de Jaime Mañalich, ex ministro de salud, a fin de aclarar varios



puntos de la estrategia sanitaria empleada por el gobierno, aun cuando el propio presidente declaró que dicha estrategia estaba preparada desde enero de 2020 para evitar los niveles alcanzados por Italia, tanto de contagiados como de fallecidos.

Gráfico 4. Indicadores del COVID-19 en Chile (2020)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de datos extraídos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) y Worldometer (2020).

CRISIS MEDIOAMBIENTAL

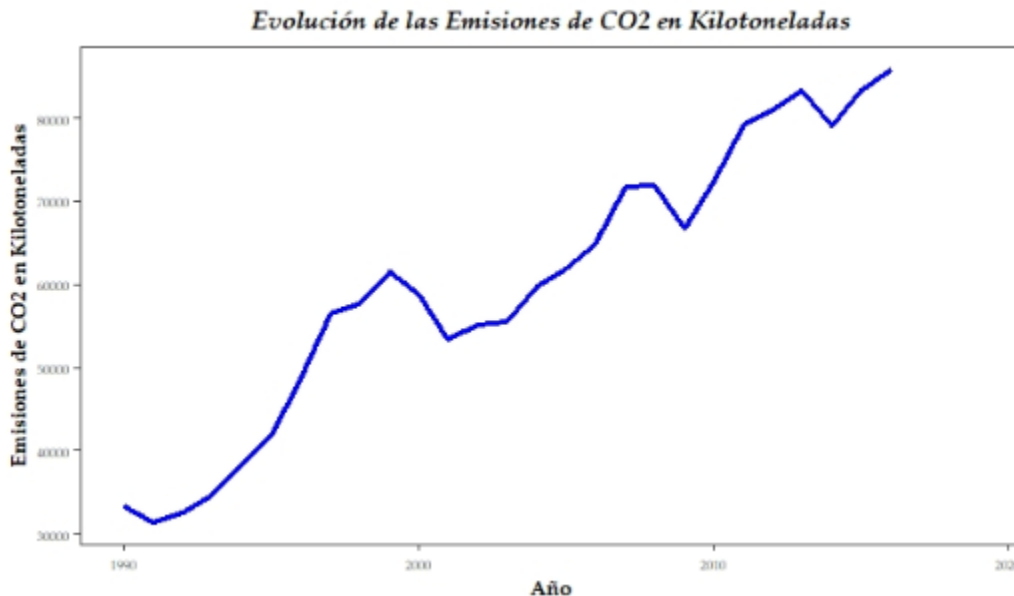
Las crisis medioambientales chilenas han sostenido un desarrollo constante desde la implementación de la ley 19.300 de Bases del Medioambiente. Respecto de estas, se han debido, mayormente, a la implementación de proyectos de energías alternativas que invaden de superlativa los ecosistemas regionales. En este sentido, tenemos las protestas por la implementación de la **hidroeléctrica Pangue en el Alto Biobío** durante los gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la implementación de la hidroeléctrica Ralco, puesta en servicio durante el año 2004. Estos dos proyectos hidroeléctricos llevaron a severos conflictos con comunidades pehuenche, mientras que el proyecto Hidroaysén generó también profundos conflictos con las comunidades locales, las cuales se oponían al proyecto en conjunto con movimientos ambientalistas de Santiago como **“Patagonia sin represas”**. Esto redundó en la cancelación del proyecto en **2012**.

En lo que respecta a crisis ambiental, Chile mantiene una constante en cuanto a emisiones de CO₂, que se asemeja al resto de la región, dejando de lado a Brasil, Argentina y Venezuela, país con un mayor desarrollo industrial. Esta curva si bien se mantiene baja, es importante señalar que cada año va tomando una inclinación positiva lo cual significa que el país va generando una mayor huella de carbono con lo que



respecta a años anteriores. En este sentido, dar de baja plantas de energía en base a carbón no ha mejorado estos niveles, ni la producción minera.

Gráfico 5. Indicadores de emisiones de CO2 en Chile (1990-2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir del World Development Indicators del Banco Mundial (2020)

VIOLENCIA

Desde el plano del uso de la violencia y la estabilidad política, Chile presenta a finales de los años 90, su punto más crítico en cuanto al análisis de este tópico, dado por este proceso de transición democrática, en la cual aún se mantenían activos grupos subversivos. Posterior a esto, será en 2002 el punto más elevado en el cual Chile mantendrá bajos niveles de violencia y de estabilidad política, pero posterior a 2002 este índice comienza a mantener línea constante en la cual hay puntos de inflexión los cuales calzan con las **manifestaciones sociales de 2006-2008, 2011-2012** y finalmente 2019, punto más crítico dentro de los últimos 20 años.

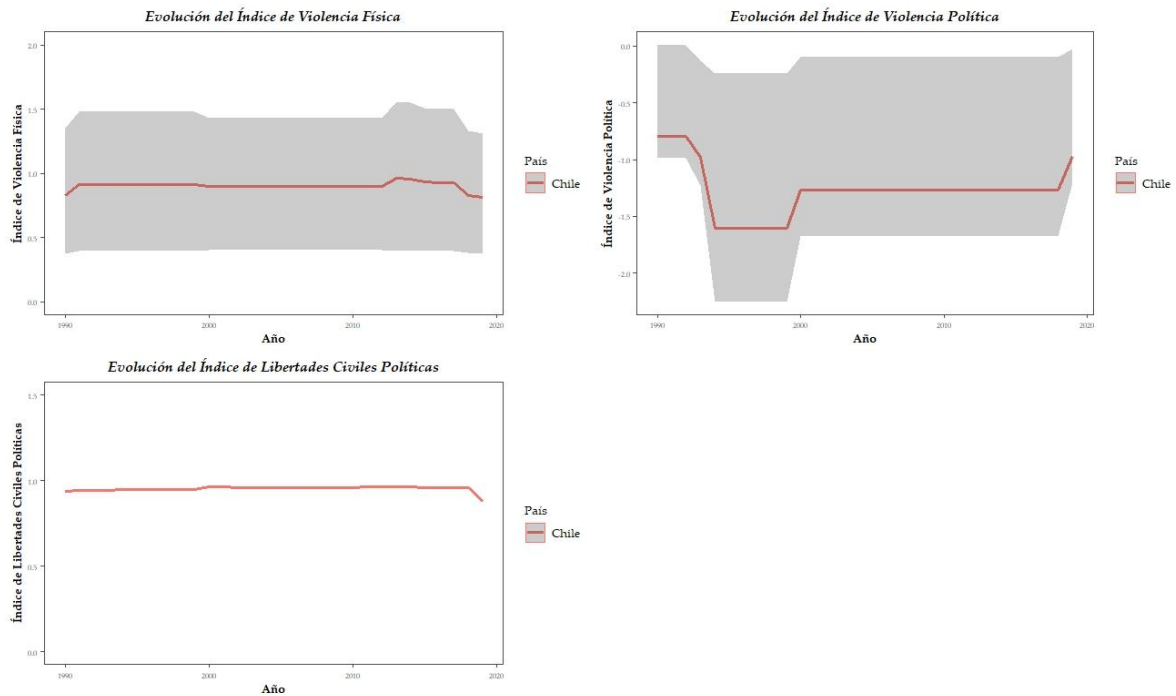
De este modo, se afirma la idea de que los incidentes ocurridos, por ejemplo, en La Araucanía, así como aquellos conflictos de alta violencia como los desarrollados al alero de conflictos socioambientales no han conllevado un cambio en las percepciones sobre la lógica, más bien aislada, de los incidentes. Esto último redundo en que no se plantea una violencia estatal sistemática (Coppedge et al., 2020).



No obstante, sí existe un componente de violencia política proveniente de actores no estatales que, aunque sus niveles han aumentado consistentemente desde el año 2001, con un segundo incremento en 2019 tras el Estallido Social.

Luego, el Índice de Libertades Civiles Políticas indica que el uso de la represión es muy bajo, dado que este mide la ausencia de represión por parte del Estado. No obstante, se registra una baja, especialmente por el Estallido Social.

Gráfico 6. Indicadores de violencia y su evolución en Chile (1990-2019)



Fuente: Elaboración propia del Observatorio de Crisis FAHU, a partir de los indicadores de Varieties of Democracy (Coppedge et al., 2020).



CONCLUSIÓN

Chile no ha tenido una gran cantidad de crisis en comparación con el resto de los países de la región. Cabe destacar que sus crisis de carácter económico han sido efectos exógenos provocados por un mercado global, con ciertas condiciones dadas en su interior, especialmente de desigualdad del mercado, pero también de la escasa eficacia redistributiva del Estado. Ahora bien, la principal crisis que ha tenido el país desde 1990 hasta hoy en día, ha sido el 18 de octubre de 2019, caracterizada por ser una crisis social que desembocó en una crisis política. Es relevante mencionar que esta crisis social es promovida por la juventud chilena, la cual fue foco central en el inicio de las movilizaciones, para posteriormente unificar diferentes demandas sociales en lo cual uno de los cambios más significativos fue el plebiscito por una nueva constitución.

En este sentido, las crisis ambientales, así como aquellas netamente políticas no han modelado la percepción de que, en general, Chile sigue siendo uno de los países más estables de la región junto a Uruguay.

El Estallido Social, sin embargo, vino a remecer al sistema político en su conjunto. Junto con un aumento de la violencia, tanto estatal como de actores no estatales, también ha sido un proceso que ha desnudado la necesidad de mayor igualdad, así como de una acción redistributiva más eficaz por parte del Estado, tema que ha dividido a la prensa sobre cómo comprender y brindar cobertura a los sucesos del Estallido. Las tendencias de los indicadores que revisan la dimensión igualitaria de la democracia chilena, así como la corrupción de los medios, confirman estos asertos. Así, las consecuencias del Estallido Social siguen en compás de espera ante un proceso constituyente que remece las expectativas de todos los actores sociales, económicos y políticos.



REFERENCIAS

- Aguirre, F. García, O. (2013). Más allá del malestar. Una hipótesis sociológica sobre el significado político del movimiento estudiantil chileno. *Revista de Sociología e Política* vol. 23(53). 147-162. <https://www.scielo.br/pdf/rsocp/v23n53/0104-4478-rsocp-23-53-0147.pdf>
- Avendaño, O.A. (2013). Las reformas políticas en el gobierno de Sebastián Piñera Chile, 2010–2013. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* 58(218). 167 – 191.
- Banco Mundial (2020). World Development Indicators [Base de datos]. <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
- BBC Mundo (2018, 11 de marzo). Por qué el segundo gobierno de Michelle Bachelet es considerado por muchos el más importante en décadas en Chile. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43339035>
- Basque Trade & Investment. (2020, 28 de abril). *Informe impacto de la Covid-19 en Chile*. <https://basquetrade.spri.eus/wp-content/uploads/2020/05/200505-Chile-Informe-COVID19-1.pdf>
- CNN Chile (2020, 21 de diciembre). 18-O: Desbordes dice que no sólo el gobierno estuvo en riesgo de caer, sino que “la República completa”. <https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/desbordes-estallido-social-riesgo-caer-republica-completa-20201221/>
- Coppedge, M., J. Gerring, C. Henrik Knutsen, S. I. Lindberg, J. Teorell, D. Altman, M. Bernhard, M. S. Fish, A. Glynn, A. Hicken, A. Luhrmann, K. L. Marquardt, K. McMann, P. Paxton, D. Pemstein, B. Seim, R. Sigman, S.-E. Skaaning, J. Staton, S. Wilson, A. Cornell, N. Alizada, L. Gastaldi, H. Gjerløw, G. Hindle, N. Ilchenko, L. Maxwell, V. Mechkova, J. Medzihorsky, J. von Römer, A. Sundström, E. Tzelgov, Y.-t. Wang, T. Wig, and D. Ziblatt. 2020. *V-Dem [Country–Year/Country–Date] Dataset v10*. *Varieties of Democracy (V-Dem) Project*. <https://doi.org/10.23696/vdemds20>.
- Covarrubias, A. (2002). *El manejo de la economía chilena frente a la crisis asiática 1997-2001*. Panorama Socioeconómico. <http://panorama.utalca.cl/dentro/2002-may/evolucioneeconomica%5B1%5D.pdf>
- Fleet, N. (2019). Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile 2011-2019. Pléyade (número especial). <http://www.revistapleyade.cl/protesta-social-y-crisis-del-poder-neoliberal-en-chile-2011-2019/>



- Funk, R. (2009). Chile 2008: segundo tiempo. *Revista de Ciencia Política* 29(2). 301–326.
- Huneus, C. (2008). Las cuatro singularidades del Gobierno de Michelle Bachelet. *Quórum* (20). 71 – 87.
- Insulza, J. (1998). *Los efectos de la crisis asiática y sus efectos en la economía chilena*. Análisis político coyuntural 3/98. (Serie publicaciones). Fundación Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/vifa-latam/c98-03012.pdf>
- Biblioteca Nacional de Chile (s.f.) Crisis económica 1982. En La transformación económica chilena entre 1973-2003. *Memoria Chilena*. Consultado el 8 de diciembre del 2020. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98012.html>
- Olivares, E. (2020, 15 de abril). El 2020 entrará en la lista de las 15 peores recesiones de la historia de Chile. *Pauta*. <https://www.pauta.cl/economia/fmi-proyecta-recesion-chile-2020-como-se-compara-en-la-historia-economica>
- Organización Mundial de la Salud (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Base de datos]. <https://covid19.who.int>
- Rodríguez Elizondo, José. (2006). *Las crisis vecinales del gobierno de Lagos*. Santiago de Chile: Debate.
- San Martín, D. (2018). Chile a 10 años de la Crisis Subprime. (Documento de trabajo n°10). *Centro UC Estudios Internacionales*. <http://centroestudiosinternacionales.uc.cl/images/publicaciones/publicacion-es-ceiuc/2018/Abril/Chile-a-10-aos-crisis-Subprime.pdf>
- Solt, F. 2020. Measuring Income Inequality Across Countries and Over Time: The Standardized World Income Inequality Database. *Social Science Quarterly* 101(3): 1183-1199. SWIID Version 9.0, October 2020.
- Sotomayor, F. (2019). Malestar, acción colectiva y movimientos sociales en Chile (2001-2017). *Aposta. Revista de Ciencias Sociales* 80. 44-60. <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sotomayor.pdf>
- Valenzuela Lafourcade, M. (1999). *El enigma de la Laguna del Desierto: Una memoria diplomática*. Santiago de Chile: LOM.
- Varieties of Democracy (2020). V-Dem Datasets [Base de datos]. <https://www.v-dem.net/en/data/data/>



FACULTAD DE
HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE



Worldometer (2020). *Real Time Statistics Project* [base de datos].
<https://www.worldometers.info/coronavirus/>